

**Enrique FUENTES QUINTANA (dir.) y Francisco COMÍN COMÍN (coord.), *Economía y economistas españoles en la guerra civil*, Barcelona, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Galaxia Gutenberg, 2008, 2 Vols., 1140 y 995 pp.**

Esta obra reúne bajo la sagaz batuta de su director, Enrique Fuentes Quintana, buena parte de las investigaciones realizadas en las últimas décadas sobre el origen, el desarrollo y las consecuencias de la guerra civil en el ámbito de la historiografía española. Es necesario advertir a los posibles lectores de que no se trata solo de una compilación o de una síntesis de lo ya publicado, la mayoría de capítulos ofrece argumentos refrescantes, novedosas perspectivas de análisis y evidencia cuantitativa inédita que sostiene las interpretaciones ofrecidas. Francisco Comín Comín –coordinador de la obra y autor de varios capítulos– narra con detalle en la introducción cómo nació el proyecto y se cocinó a fuego lento, sin prisas pero sin pausas, con la intención de hacer primar la calidad sobre otros intereses editoriales o comerciales. En paralelo, trata de justificar el porqué ahora y no antes de la publicación de una obra académica de esta envergadura sobre la guerra civil. A este respecto, destaca tres factores claves: la importancia de la perspectiva histórica, la necesidad de dejar madurar las circunstancias políticas y los avances de los estudios científicos de la mano de la democracia. Por último, realiza un alegato a favor de la investigación académica y la defensa del método científico –no reñido con lo divulgativo–, basado en el trabajo de las fuentes, el contraste de hipótesis y la objetividad, frente a la avalancha de obras sobre la guerra civil, de muy dispar calidad y rigor, que en los últimos tiempos han invadido el mercado.

En conjunto, el libro está compuesto por dos volúmenes que suman más de dos mil páginas, divididos en cuarenta y siete capítulos, donde han participado más de cuarenta especialistas de reconocido prestigio. Confío en que los lectores entenderán las dificultades que implica reseñar una obra de estas características. En realidad, cada una de las cuatro partes en que se divide el libro tiene interés por sí misma y podría haber constituido un volumen independiente. Aún así, director y coordinador han conseguido tejer una obra que cuenta con una sólida estructura interna, cuyo engranaje conduce con maestría al lector por los entresijos de uno de los periodos históricos más complejos y dolorosos de la España contemporánea. Si bien es cierto que, en ocasiones, se repiten algunos acontecimientos e ideas en diferentes capítulos, se trata de un problema menor y de difícil solución en una publicación colectiva de estas dimensiones.

La primera parte de la obra analiza el contexto político, internacional, demográfico, social y local en que se desencadenó la guerra civil. El capítulo inicial elaborado por Santos Juliá nos proporciona las claves de los orígenes del conflicto. En el caldo de cul-

tivo encontramos factores diversos como los intereses de clase amenazados fruto de la lucha social o la mentalidad del estamento militar como guardián del orden público, pero la religión, el comunismo o los nacionalismos enfrentados aportaron también su grano de arena a la compleja trama. El autor señala que el golpe de estado de julio de 1936 derivó en guerra civil por el cruce de dos impotencias; la de los militares sublevados para hacerse con el poder frente a un gobierno incapaz de liquidar la sublevación. Las llamas ya encendidas fueron avivadas por la intervención extranjera y una cultura política que venía exaltando el patriotismo y la violencia para resolver los conflictos en torno a intereses de clase.

En los siguientes capítulos que configuran la primera parte se analizan los factores que explican el triunfo del golpe de estado por la vía de las armas a través de tres elementos clave. En primer lugar, Hugo García e Ismael Saz estudian la unidad de mando de los sublevados frente a la fragmentación de la España republicana. Hugo García señala que la frágil unidad antifascista de la política republicana se vio debilitada por las luchas internas y los diferentes objetivos políticos, lo que derivó en la incapacidad para establecer estrategias claras, tomar decisiones y conseguir ayuda externa de las democracias. Por el contrario, Ismael Saz destaca la unidad interna de los sublevados, reforzada por dos factores: la persecución de un objetivo común —la destrucción del liberalismo, la democracia y el marxismo en un marco de crisis de las democracias europeas— y la habilidad de Franco para consolidarse en el poder actuando como árbitro entre las distintas tendencias internas y aprovechando los errores de sus adversarios. Las diferentes estrategias políticas de los dos territorios enfrentados se vieron reflejadas en la actuación de los poderes locales, como analiza Ángela Cenarro. La autora nos recuerda que el golpe de estado fue acompañado de una trama civil paralela que resultó clave para la captación de recursos y la transmisión de órdenes. Dentro de este contexto, los poderes locales de la España sublevada consiguieron con rapidez reconstruir las administraciones, hacerse con el gobierno y establecer con mano de hierro su nuevo orden social. Mientras tanto, en el ámbito local, la zona republicana no supo, en general, gestionar de manera eficiente la retaguardia ni articular una estrategia única de actuación, lo que concedió demasiadas ventajas al bando sublevado. Ahora bien, el hundimiento de las estructuras estatales de la República no equivalió al descontrol absoluto y su grado de capacidad organizativa varió según zonas.

Las líneas descritas en los anteriores capítulos dejaron su impronta en el ámbito militar, como explica Gabriel Cardona. En los dos ejércitos en lucha se contraponían la organización, mejores tropas, disciplina militar y mayores recursos bélicos de los sublevados; frente a un ejército republicano que se debatía entre el voluntarismo, las contradicciones y la impotencia. El trabajo de Ángel Viñas proporciona valiosos datos cuantitativos que avalan esta tesis y permiten matizar algunas de las ideas repetidas de manera recurrente en la historiografía. El autor parte de la idea de que ni los sublevados ni el gobierno disponían de los medios necesarios para sostener una guerra civil y mucho menos para una contienda que duró casi tres años. Bajo estas circunstancias, la ayuda exterior se convirtió en un elemento clave para el desenlace del conflicto, conclusión que comparte Enrique Moradiellos. Este autor señala que Franco mostró una gran habilidad para conseguir el apoyo de otros regímenes fascistas y a la vez bloquear la ayuda de las potencias democráticas a la República, lo que supuso su victoria en la guerra diplomática. A este respecto, Ángel Viñas explica como la política de “no intervención” de las demo-

cracias europeas causó un doble impacto negativo sobre la República. De un lado, privó de recursos básicos al gobierno elegido por las urnas y, de otro, concedió una ventaja decisiva al ejército sublevado, que sí recibió apoyo humano y material abundante de manera rápida y continua desde las potencias fascistas europeas. Esta ayuda no puede ser equiparada a la recibida de forma tardía e irregular por el gobierno republicano desde la Unión Soviética.

La segunda parte de la obra engloba los trabajos que analizan la evolución de las economías españolas y las políticas económicas aplicadas durante la guerra civil. Uno de los puntos fuertes de este bloque descansa en que la temática y el orden de los capítulos permite analizar los acontecimientos desde la doble perspectiva de la España democrática y sublevada, lo que enriquece la visión del lector y facilita la comprensión. El primer capítulo, elaborado por José Ángel Sánchez Asiaín proporciona las coordenadas básicas de los dos modelos económicos enfrentados durante el conflicto, que determinaron en buena medida su desenlace. En su análisis, contraponen el modelo de corte revolucionario y anticapitalista, con alto y creciente contenido anarquista, de la República frente al modelo centralizado y de estricta ortodoxia del gobierno de Burgos. Los siguientes capítulos desarrollan las principales características de estos modelos desde distintos puntos de vista.

En el ámbito de la política agraria, Julián Casanova analiza el proceso de colectivizaciones en el campo que tuvo lugar en algunas zonas leales al gobierno democrático republicano. Según el autor, el vacío de poder tras el golpe de estado permitió comenzar una revolución contra el viejo orden establecido. Sin embargo, las colectivizaciones no contaron con el apoyo de importantes sectores del campesinado (ni del gobierno republicano desde el verano de 1937), carecían de una mínima planificación y apenas dispusieron de tiempo para cuajar, tres condiciones básicas para su desarrollo. En consecuencia, resultaron procesos demasiado emergentes para consolidarse como instituciones alternativas a la propiedad privada que se vieron salpicados por el clima de violencia de la coyuntura bélica. Por su parte, Carlos Barciela analiza las reformas agrarias en la zona franquista. Su estudio parte de la idea de que los problemas agrarios que protagonizaron los años de la República y, sobre todo, el proyecto de reforma agraria redistribuidora de la propiedad acentuaron el enfrentamiento entre las diversas fuerzas políticas y contribuyeron al golpe de estado de 1936. Los sublevados aplicaron de inmediato en sus territorios medidas retroactivas que dismantelaron la obra agraria republicana y favorecieron los intereses de los grandes propietarios agrarios. Más tarde, el Ministerio de Agricultura del primer gobierno franquista (enero de 1938), construyó su propio proyecto agrario bajo el control de los falangistas. Dentro de esta etapa, se aplicó –con escasos resultados– una política de colonización de tierras y de intervención totalitaria en el sector cerealista, basada en la fijación de bajos precios de tasa.

Por lo que se refiere a la política industrial, Josep M. Bricall sostiene que el gobierno republicano, primero intentó moderar las consecuencias de la escasez, el paro y la inflación a través del control de la demanda y, más tarde, trató de impulsar la revolución social a la vez que aplicaba medidas típicas de una economía de guerra, a través de la oferta. Según este autor, los resultados fueron discretos. De un lado, no pudo contener la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de la población. De otro, la mayoría de industrias no pudieron sostener su producción prebélica, como muestran los datos obtenidos de la industria catalana. Por su parte, Elena San Román analiza cómo la inferioridad industrial

del ejército franquista en los inicios de la guerra se modificó a medida que cambiaban los frentes bélicos. Una de las claves de este proceso descansó en la caída del frente norte que reportó un importante botín industrial para el gobierno sublevado. La autora sostiene como uno de sus argumentos principales que la opción de la empresa pública, protagonista de muchos planes dictatoriales en la posguerra, ya había representado un papel clave en la política industrial franquista durante el conflicto civil e incluso en los planes industriales trazados por los militares durante los años de entreguerras, influidos por las enseñanzas de la Gran Guerra en materia industrial. El capítulo de Jordi Catalan aporta un análisis en perspectiva comparada de la producción industrial (sin construcción) en los dos territorios en guerra, apoyado por una valiosa información cuantitativa. El autor analiza los factores que determinaron la crisis industrial de la España republicana y las claves que permitieron la expansión industrial en la España sublevada. Para Catalan la confusa toma de decisiones de los dirigentes republicanos debilitó el funcionamiento de la industria de guerra en sus territorios, pero las causas de la crisis industrial republicana recayeron sobre todo en el paulatino estrangulamiento del mercado y en la falta de materias primas (incluyendo combustibles). Por el contrario, la retaguardia sublevada contó con mercados crecientes y la normalización en el suministro de materias primas, a la sombra del avance bélico. Ahora bien, los resultados generales esconden diferencias territoriales fruto de la intensidad de los combates. La última parte del capítulo analiza las consecuencias del triunfo de los sublevados sobre la industria. Los resultados son contundentes. El grueso de la industria de la España republicana no experimentó una neta recuperación en la posguerra por la carencia de materias primas, la falta de dinamismo en los mercados de bienes de consumo y la política represiva de la dictadura. Por otro lado, la euforia industrial de la España franquista se desinfló tras el conflicto por el intervencionismo, la autarquía y la falta de competitividad de las provincias sublevadas, entre otros factores.

El transporte y el suministro de carburantes constituyen dos piezas estratégicas en toda coyuntura bélica. Partiendo de esta idea, Francisco Cayón y Miguel Muñoz analizan la fractura ferroviaria en la guerra civil. Al calor de las estadísticas disponibles —más escasas para el territorio republicano—, los autores obtienen dos conclusiones básicas. En primer lugar, los territorios sublevados lograron mantener durante el conflicto una oferta de transporte ferroviario supeditada a su estrategia bélica, mientras que el gobierno republicano no militarizó los ferrocarriles hasta finales de 1938. En segundo lugar, las destrucciones ferroviarias fueron exageradas de manera premeditada por los vencedores y por las compañías para favorecer sus intereses particulares, si bien es cierto que el conflicto deterioró las condiciones de la red y del material rodante. Por otra parte, Guillem Martínez analiza las disponibilidades de petróleo de cada uno de los territorios enfrentados durante el conflicto. Concluye que en esta partida la mano también resultó favorable al gobierno sublevado, sobre todo por dos factores: contaron con abundante cantidad de crudo y en condiciones de pago más ventajosas que las del gobierno republicano.

En realidad, como explica Elena Martínez, los dos gobiernos en lucha aplicaron políticas comerciales similares después de los primeros momentos de desconcierto, consistentes en la centralización de la administración de divisas, la regulación central de las operaciones de comercio exterior y la creación de un organismo encargado de las compras de material militar. Ahora bien, las relaciones económicas internacionales resultaron muy desiguales en cada uno de los territorios, pues el gobierno democrático se encontró con

más dificultades para asegurar suministros militares y civiles, mientras que la España franquista recibió un trato comercial más favorable. La autora sostiene que esta desigualdad descansó en factores externos, como la asimétrica acción de las democracias occidentales y de las dictaduras fascistas, y no en los problemas políticos internos de la República. Ahora bien, Francisco Comín y Santiago López puntualizan que el problema de los abastecimientos alimenticios en el territorio republicano no se debió tanto al bloqueo de las democracias como a la falta de divisas y a las dificultades de la logística de transporte y distribución en un marco de sabotajes internos y externos. Estos autores añaden que los recursos extraordinarios contribuyeron a la financiación del grueso de los gastos de la guerra en ambos gobiernos, pero con diferencias. La República se nutrió de los préstamos del Banco de España y en menor medida de la venta del oro y de las incautaciones practicadas a través de la Caja General de Reparaciones a quienes habían apoyado la rebelión de los militares –como analiza Glicerio Sánchez Recio–. Sin embargo, el gobierno republicano apenas contó con donativos y créditos interiores ni internacionales, partidas muy importantes para la Hacienda de Franco junto con el botín de guerra de las zonas ocupadas, como explican Miguel Martorell y Francisco Comín. Los estudios concluyen que la resistencia de la República duró mientras duraron sus recursos económicos y productivos, más escasos que los de los sublevados, pero gestionados también de manera poco eficiente por las luchas políticas internas y un territorio decreciente.

En paralelo, el gobierno democrático hubo de asumir la cuestión autonómica –presente en la agenda política de los gobiernos republicanos desde 1930– en una coyuntura bélica de “anormalidad política”. Rafael Vallejo explica como solo Cataluña contaba con Estatuto y experiencia de autogobierno cuando estalló la guerra, aunque el traspaso de competencias desde el Estado no estaba completo. La caída de Vizcaya en junio de 1937 limitó la vigencia del gobierno vasco y significó que únicamente Cataluña mantuvo su autogobierno durante el conflicto. Según Vallejo, se trataba de una “autonomía de guerra”, pues su gobierno asumió amplias competencias e introdujo novedades fiscales empujado por los acontecimientos. Su Hacienda acabó desbordada por las exigencias extraordinarias de la coyuntura bélica.

En general, la guerra civil exigió la movilización de gran cantidad de recursos financieros en un marco de ruptura física y legal del sistema bancario y monetario. El segundo capítulo de José Ángel Sánchez Asiaín analiza el comportamiento y los resultados de la banca durante el conflicto. El autor encuentra similitudes en la política bancaria de los dos territorios en guerra, muy intervencionista y orientada hacia las necesidades bélicas. A conclusiones similares llega Eugenio Torres al analizar el balance de las cajas de ahorros durante la guerra civil, que hubieron de enfrentarse a la retirada de fondos primero y a ayudar a sus respectivos gobiernos después. Dentro de este contexto, los bancos emisores de cada territorio se concentraron también en suministrar a sus respectivos gobiernos los recursos precisos con estrategia y resultados desiguales, como analiza Pablo Martín Aceña. El Banco de España, bajo el control del gobierno republicano, sufrió las defecciones de algunos de sus miembros, los cambios de ubicación de su sede y los traumáticos sucesos de la incautación de los contenidos de las cajas de seguridad y el traslado de las reservas de oro y plata hacia Moscú –una decisión precipitada para Martín Aceña–. La República utilizó ampliamente y sin límite su cuenta corriente en el banco central y gastó abundantes reservas de oro y plata para atender sus compras, ante la falta de crédito ex-

terior. En realidad, como explican Francisco Comín y Santiago López, la Hacienda republicana se financió básicamente durante el conflicto con los recursos del Banco de España, primero con la venta del oro –cuya importancia relativizan estos autores– y después con una enorme emisión de dinero. Por su parte, el gobierno de Burgos organizó un nuevo banco emisor con el apoyo del personal huido, bajo el que quedaron sometidas las sucursales bancarias sitas en los territorios ocupados. La institución concedió considerables adelantos al Tesoro y créditos personales a particulares perjudicados por el conflicto. Las dos entidades centrales siguieron estrategias muy diferentes. Por lo que se refiere a la emisión de billetes, el control de las emisiones por el banco de Burgos contrastó con lo ocurrido en la zona republicana, donde hubo emisiones abundantes y dispersas que inyectaron confusión y depreciaron el valor de la moneda. Miguel Martorell analiza como la peseta republicana se depreció desde el inicio de la guerra, debido al aumento de la masa monetaria –ante el agotamiento de las reservas y la falta de crédito exterior– en un territorio decreciente, pero también como consecuencia de la progresiva desconfianza de los gobiernos y de los agentes económicos occidentales en la viabilidad del Estado republicano. Sánchez Asiaín añade que el gobierno franquista utilizó la peseta republicana capturada en los territorios ocupados como un arma para desestabilizar el sistema monetario republicano y financiar el espionaje. La guerra monetaria del gobierno de Burgos resultó efectiva, pues la peseta franquista devoró a la peseta republicana y el sistema monetario republicano se derrumbó. Según los datos oficiales presentados por Jordi Maluquer –sin considerar el mercado negro–, mientras la estabilidad de precios de preguerra se transformó en los territorios ocupados en una inflación moderada –dadas las circunstancias–, en la España republicana la elevación del coste de la vida se disparó de manera progresiva y descontrolada, con características de auténtica hiperinflación. Los resultados dispares no se debieron tanto a las diferentes políticas monetarias como a la expansión de los territorios ocupados y a la reducción de los republicanos con el trascurso de la guerra.

La tercera parte de la obra reúne estudios en torno al pensamiento económico y las propuestas de reforma de los principales economistas españoles durante la guerra civil. Abre este apartado el capítulo de Enrique Fuentes Quintana, quien analiza los diferentes intentos de establecer una Facultad de Economía en España –que comenzaron en 1931 y no fraguaron hasta 1943– en los que destaca la figura del profesor José María Zumalacárregui. Salvador Almenar Palau reflexiona sobre la circulación de una nueva oleada de ideas económicas en la década previa a la guerra civil impulsadas por una generación de investigadores, docentes y expertos con un perfil científico y formados en las corrientes europeas contemporáneas. El capítulo repasa las principales trayectorias de estos economistas y observa como el desenlace de la guerra civil condenó a muchos al exilio, mientras otros se adhirieron al régimen franquista. En cualquier caso, el autor sostiene que la guerra civil cambió el rumbo de los estudios económicos en España durante décadas. Juan Zabalza analiza los modelos de equilibrio de la economía española de tres reputados economistas, fervientes católicos que sufrieron la represión de la guerra en los dos territorios en lucha: Flores de Lemus, Perpiñá y Torres. Los tres expusieron con nitidez los problemas estructurales de la economía española y sus consecuencias sociales y ofrecieron propuestas de política económica de carácter reformista, aunque en sus estudios no discuten las alternativas que se plantearon al sistema capitalista durante los años treinta. Por su parte, Enrique Fuentes Quintana repite capítulo para ocuparse de la figura de José Larranz,

quien representó un importante papel en la gestión de la política monetaria y de la Hacienda durante la guerra civil y la posguerra.

Los siguientes cuatro capítulos se centran en el análisis de los programas económicos de las diferentes ideologías políticas que convivieron durante la guerra civil. Alfonso Sánchez Hormigo analiza el pensamiento programático en materia económica de las diversas derechas españolas entre 1931 y 1939 y sostiene que, aunque con rasgos plurales, estuvo influido por los fascismos europeos y giró en torno al fenómeno del corporativismo, considerado como una tercera vía frente al denostado liberalismo y al comunismo. Por su parte, Rafael Vallejo analiza las propuestas económicas de la conjunción republicano-socialista y del Frente Popular dentro del contexto multipartidista de centro-izquierda de la Segunda República. El autor concluye que el programa del Frente Popular apostaba por reformas moderadas para modernizar el país y contaba con el apoyo de los republicanos de clase media, pero fue imposible crear una “zona de convivencia” para aplicarlo con normalidad en un clima de tensión. Ricardo Robledo destaca el problema estructural agrario como uno de los principales factores de confrontación social que sirvió para movilizar a las asociaciones patronales y a los partidos de derechas en contra de la República. Por su parte, Luis Garrido analiza los programas económicos de anarquistas y comunistas, fuerzas políticas y sindicales sin experiencia de gobierno hasta la guerra civil, y que, aún con sus dificultades y defectos, constituyeron un intento serio de alternativa revolucionaria al sistema capitalista. Su realización práctica más interesante consistió en las colectivizaciones, pero la deriva de la guerra civil impidió que la economía social colectivista triunfara en un amplio territorio. Por último, Mercedes Cabrera y Fernando del Rey analizan las reacciones del empresariado español ante los cambios en el contexto político. Según los autores, la clase empresarial pasó primero por la crisis económica y los procesos de reforma de la Segunda República que ponían en la picota al empresariado y al capitalismo. Más tarde, el sentir amenazada su capacidad de influencia sobre el Estado, la mayoría de los empresarios prestó apoyo financiero y contactos internacionales al gobierno rebelde, lo que les reportó en algunos casos pingües beneficios a medio y largo plazo. A continuación de este capítulo se echa de menos otro que contraponga la reacción de los trabajadores ante el golpe de estado, su función durante el conflicto en las dos zonas y los efectos sobre sus condiciones laborales y vitales.

Las investigaciones que componen la cuarta parte de la obra estudian las consecuencias de la guerra sobre la economía y los economistas. La política económica de la dictadura adquiere especial protagonismo en este bloque. De este modo, al analizar las consecuencias macroeconómicas de la guerra civil desde una perspectiva internacional, Joan R. Rosés sitúa en “el debe” de los dirigentes de la dictadura el atraso económico de España en la larga posguerra, al poner trabas a la entrada de capital extranjero y de maquinaria moderna, aplicar una fuerte represión sobre el capital humano y las trabajadoras y consumir buena parte de los escasos recursos en gastos militares. Por su parte, Elena Martínez firma otro capítulo para explicar como la guerra civil dejó un país aislado del marco internacional, que había perdido las reservas metálicas del Banco de España y tenía que devolver créditos a las potencias fascistas. Ahora bien, la autora sostiene que el bloqueo internacional –solo de carácter diplomático y muy breve– apenas afectó a las relaciones comerciales del régimen. Por el contrario, las causas del deterioro de las cuentas exteriores descansaban en la escasez de dólares para importar y en la caída de las exportaciones

al mercado alemán. A este respecto, Fernando Guirao defiende la existencia de una doble moral en el bloqueo exterior al régimen franquista, pues las resoluciones de condena aprobadas en el seno de los organismos internacionales no se tradujeron en sanciones económicas ni frenaron la firma de acuerdos comerciales “sin implicaciones políticas” con la dictadura. Los dos autores coinciden en concluir que la supuesta hostilidad internacional tuvo efectos contraproducentes, pues la dictadura lejos de verse afectada la aprovechó con maestría para fortalecer su régimen en el interior del país. Finalmente, el desencadenamiento de la guerra fría consolidó el régimen de Franco en el marco internacional por razones geopolíticas. Miguel Martorell firma otro capítulo para constatar la eficacia diplomática del régimen franquista frente a las democracias occidentales en el proceso de liquidación de los activos alemanes en España, tras la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial. El proceso de negociación proporcionó al franquismo una vía de contacto permanente con los aliados en el momento de máximo aislamiento de España e incluso logró imponer sus tiempos y condiciones legales, a pesar de la aparente debilidad internacional de la dictadura.

Por lo que se refiere a las políticas internas, el capítulo de Juan Pan-Montojo analiza las consecuencias de la guerra civil sobre las estructuras agrarias y obtiene dos principales conclusiones. Primero, sostiene que la victoria franquista no significó la restauración en el campo del *statu quo* anterior a 1931, ni en términos de propiedad ni de explotación de la tierra. Segundo, señala que las políticas agrarias del franquismo en la inmediata posguerra sacrificaron los intereses de parte de los rentistas rurales –un segmento de la clase media que había apoyado en gran parte el golpe de estado– y facilitaron el acceso a la propiedad de los pequeños colonos con dos objetivos: ampliar los apoyos políticos y fomentar la producción agraria en un marco de escasez a través de la explotación directa. En comparación con otros bloques temáticos, la parte de libro que analiza las consecuencias de la guerra desde el punto de vista de las políticas internas resulta un tanto exigua. Aunque imagino que era necesario poner límites, dada la magnitud del proyecto, en este apartado se echan de menos más investigaciones sobre los efectos del conflicto desde el punto de vista del mundo empresarial, el funcionamiento de los mercados, las políticas sociales o el papel de la mujer, entre otros.

En cuanto al impacto de la guerra civil sobre los economistas, Jaume Claret analiza el caso de la universidad española, donde el golpe de estado quebró los proyectos de reforma dibujados en los primeros años treinta, fracturó la comunidad universitaria y derivó en una contundente represión que depuró a la parte más renovadora del mundo universitario español. Como complemento a este capítulo, el trabajo de Manuel Martín Rodríguez y Eloy Fernández Clemente ofrece un primer catálogo compuesto por casi sesenta economistas académicos del exilio republicano ocasionado por la guerra civil. A través de esta relación es posible constatar con nombres y apellidos la valía profesional de estos exiliados políticos –la mayoría de ellos con una importante proyección internacional– y la sangría que supuso su salida para el progreso científico y cultural de España. A este respecto, Julio Alcaide sostiene que la paralización del crecimiento de la población española entre 1936 y 1940 no vino ocasionada por la actividad bélica ni por la represión, ni por el exilio –cuyas estimaciones ajusta a la baja– sino por la caída de la tasa de natalidad. Concluye que los efectos del exilio resultaron graves no tanto por su impacto sobre la demografía sino por la elite de profesionales a los que afectó. Por su parte, Manuel Aznar Soler



analiza la descapitalización cultural, científica, técnica, artística y educativa de España como consecuencia de la guerra civil. Añade que el exilio republicano pasó de la esperanza de retorno con la dignidad debida a la conciencia de un destierro largo a finales de los años cuarenta, cuando la guerra fría marcó los nuevos intereses estratégicos de la política internacional. Más adelante, la oposición interna al régimen de Franco comenzó a tender puentes con los exiliados políticos, una alianza que reavivó la esperanza de volver bajo una amnistía. Aznar concluye que las razones políticas que impedían el regreso de los exiliados desaparecieron con la Constitución de 1978, pero el olvido del exilio fue uno de los precios a pagar por la oposición al franquismo reformista para conseguir la transición democrática. El capítulo de José Carlos Mainer revela como la catástrofe cultural que supuso la guerra y la posguerra durante generaciones no solo afectó a las personas sino también al patrimonio artístico y editorial, herido por la violencia del conflicto y la censura de la posguerra. En general, como señala Santos Juliá, se puede hablar de clima de violencia y represión global durante la contienda, con víctimas y verdugos en los dos frentes en lucha. Ahora bien, como explica este autor, hubo diferencias claras entre las dos facciones. Los gobiernos republicanos trataron de parar la violencia del terror y recuperar las garantías constitucionales, mientras que en el lado franquista ni se adoptaron medidas similares ni cesó la represión una vez terminado el conflicto.

La obra se cierra con un apéndice fotográfico comentado por Francisco Comín, quien afirma que en muchas ocasiones, y más en una guerra, una imagen vale más que mil palabras. Las ilustraciones incluidas en la parte final del libro hacen justicia a esta expresión popular y redondean una obra de gran valor académico y científico. En realidad, el libro reseñado constituye un perfecto ejemplo de que la guerra civil fue un conflicto multilateral que no enfrentó solo a dos ejércitos, ni a dos formas de entender el estado, la sociedad o la política, por lo que las explicaciones simplistas no sirven. Hubo múltiples frentes abiertos durante los tres años de conflicto porque el gobierno sublevado impulsó una ofensiva global. Bajo esta perspectiva, las investigaciones que componen la obra se complementan sin necesidad de jerarquizar los factores explicativos o los argumentos. En definitiva, esta obra póstuma del profesor Enrique Fuentes Quintana –maestro de maestros– resulta de obligada lectura para cualquier estudioso dispuesto a emprender una investigación sobre el tema, para cualquier docente interesado en actualizar sus conocimientos y, en general, para cualquier persona que desee entender y conocer uno de los periodos más convulsos de la historia económica contemporánea a través de argumentos científicos alejados de pasiones ideológicas y adulteraciones del lenguaje.

MARGARITA VILAR RODRÍGUEZ